



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

## **S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 80 O R D I N A R I A**

**JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017**

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos del jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

### **I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número setenta y nueve ordinaria, celebrada el martes veintinueve de agosto del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

### **II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nación del jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete:

**I. 59/2017**

Acción de inconstitucionalidad 59/2017, promovida por el Partido Político MORENA, demandando la invalidez de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de junio de dos mil diecisiete. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I y 97 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 18, párrafos sexto y octavo; y 66, inciso b), primer párrafo de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, este último en términos de la interpretación conforme contenida en el considerando octavo de esta ejecutoria. CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 35, párrafo primero de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. QUINTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Guerrero. SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad en la presentación de la demanda, a la legitimación del promovente y a la precisión de la litis, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando cuarto, relativo a la improcedencia. El proyecto propone sobreseer, de oficio, en relación con los artículos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I, y 97 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; en razón de que hay ausencia de conceptos de invalidez, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, y 61, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, relativo a la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Improcedencia, consistente en sobreseer, de oficio, en relación con los artículos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I, y 97 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando sexto, tema 1, denominado "Prohibición de ofrecer y desahogar la prueba pericial en medios de impugnación vinculados con el resultado del proceso electoral". El proyecto propone reconocer la validez del artículo 18, párrafos sexto y octavo, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; en razón de que si bien existe esa limitación en la norma, obedece a la naturaleza de los procesos electorales y de los medios de impugnación de resolverse en forma definitiva en plazos breves, para permitir a los órganos jurisdiccionales resolver con oportunidad las impugnaciones planteadas, con el fin de que pueda conocer, en última instancia, la autoridad jurisdiccional federal, sobre todo para que esto se lleve a cabo antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos con la toma de posesión de los funcionarios elegidos.





Sesión Pública Núm. 80

Jueves 31 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en favor del sentido del proyecto, pero con diferencias en las consideraciones, por lo que formulará voto concurrente.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció de acuerdo con la conclusión del proyecto, pero se apartó de las consideraciones, en tanto que la porción normativa del artículo impugnado que indica: “No obstante, el Magistrado Ponente, cuando lo considere necesario, podrán (sic) ordenar como diligencia para mejor proveer el desahogo de dictámenes periciales a cargo de peritos adscritos a la Coordinación General de Peritos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, quienes quedarán obligados a rendir sus dictámenes dentro del breve plazo en que les sea requerido”, se relaciona con el artículo 14, párrafo 7, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual expresa que “La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos”.

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó en contra del proyecto porque, si bien la limitación del ofrecimiento y admisión de la pericial tiene el fin legítimo de impedir conductas que retrasen de manera injustificada etapas del proceso electoral, constituye la medida más restrictiva para la consecución de este fin y, en ese sentido, se viola el derecho de defensa, por lo que debería invalidarse el artículo





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

18, párrafo sexto, en la porción normativa “en aquellos medios de impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, tema 1, denominado “Prohibición de ofrecer y desahogar la prueba pericial en medios de impugnación vinculados con el resultado del proceso electoral”, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por mayoría diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por otras razones, Luna Ramos en contra de las consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de reconocer la validez del artículo 18, párrafo sexto, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente. El señor Ministro Medina Mora I. votó en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por otras razones, Luna Ramos en contra de las consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las consideraciones, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de reconocer





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la validez del artículo 18, párrafo octavo, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente.

Los señores Ministros Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes generales.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando séptimo, tema 2, denominado “Notificación automática del acto o resolución, al partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que resuelve”. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 35, párrafo primero, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; en razón de que, de acuerdo con el precedente de la acción de inconstitucionalidad 94/2016 y su acumulada 96/2016, en la que se analizó un supuesto normativo igual, y se concluyó que una notificación automática no conlleva necesariamente el conocimiento pleno de la resolución o acto impugnado en sus fundamentos, razones y motivos.

El señor Ministro Franco González Salas anunció voto en contra, como lo realizó en el precedente en cita, y aclaró que extendería sus razones en su voto particular, entre otras, que en el procedimiento electoral se tiene necesariamente conocimiento de la discusión y de la resolución que se toma en los órganos respectivos y, por





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ello, siempre han existido normas de este tipo en los ordenamientos correspondientes, dado los tiempos perentorios con que cuentan los tribunales, incluyendo esta Suprema Corte para resolver.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando séptimo, tema 2, denominado “Notificación automática del acto o resolución, al partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que resuelve”, consistente en declarar la invalidez del artículo 35, párrafo primero, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, la cual se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Franco González Salas votó en contra y anunció voto particular.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando octavo, tema 3, denominado “Causal de nulidad de elección de un gobernador, diputados de mayoría relativa y de ayuntamientos, por la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en ley”. El proyecto propone reconocer la validez del artículo 66, inciso b), párrafo primero, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; en razón de que,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de acuerdo con el precedente de la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, se estudió una disposición similar, y se decidió interpretar la norma de conformidad con el artículo 41, base VI, inciso b), constitucional, a fin de que se entienda que procede la nulidad de las elecciones con motivo de la adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en ley y, por tanto, no sólo entra la compra, sino también la adquisición cualquiera de los medios de los que se pueda tratar.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que en esa acción de inconstitucionalidad votó con el sentido, pero en contra de las consideraciones, dado que no se amerita una interpretación conforme, sino la aplicación directa de la previsión “o adquiriera” del citado artículo constitucional.

El señor Ministro Medina Mora I., ante el precedente reciente en el que se determinó que los congresos locales tienen competencia respecto de la nulidad de las elecciones, obligado por ese criterio mayoritario compartió el sentido del proyecto, compartiendo la interpretación sistemática apuntada por la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando octavo, tema 3, denominado “Causal de nulidad de elección de un gobernador, diputados de mayoría relativa y de ayuntamientos, por la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

previstos en ley”, consistente en reconocer la validez del artículo 66, inciso b), párrafo primero, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz vía la interpretación sistemática determinada en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas, Luna Ramos en contra de las consideraciones, Franco González Salas vía una interpretación sistemática, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. vía una interpretación sistemática, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando noveno, relativo a los efectos. El proyecto propone determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Guerrero.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando noveno, relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Guerrero, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I, y 97 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 18, párrafos sexto y octavo, y 66, inciso b), párrafo primero, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, este último en términos de la interpretación conforme contenida en el considerando octavo de esta ejecutoria. CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 35, párrafo primero, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. QUINTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Guerrero. SEXTO.*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

## II. 35/2016

Controversia constitucional 35/2016, promovida por el Poder Judicial del Estado de Colima, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicho Estado, demandando la invalidez del artículo 24, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, reformado mediante Decreto 57, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el primero de marzo de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SEGUNDO.** *Se reconoce la validez del artículo 24, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima y del Artículo segundo transitorio del Decreto número 57 publicado el primero de marzo de dos mil dieciséis en el periódico oficial local”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo relativos, respectivamente, a la competencia, a la fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia, a la oportunidad, a la legitimación activa, a la legitimación pasiva, a las causas de improcedencia y a los antecedentes legislativos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto con las observaciones formales remitidas vía nota por el señor Ministro Medina Mora I.

Presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado “Vicios del procedimiento legislativo”. El proyecto propone reconocer la validez del proceso legislativo del Decreto número 57 por el cual se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, publicado





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de marzo de dos mil dieciséis.

Anunció que, de aprobarse la propuesta, se incorporaría el precedente de la controversia constitucional 25/2008.

Recordó que, en ese precedente, la Constitución de Jalisco contenía el requisito, para poder realizar una reforma como la que se impugna, de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado enviara a un orador para formar parte de los debates, y se resolvió que se cumplió el procedimiento legislativo con la notificación a dicho tribunal de que se iba a debatir.

Apuntó que, en el caso concreto, se cuenta con una norma más genérica, en el tenor de que el gobernador y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado podrán nombrar un representante para que, sin voto, asista a las sesiones del Congreso, con objeto de apoyar las observaciones a las iniciativas de ley o de decreto que tengan que ver con el ramo judicial, y se le deberá dar aviso y remitir copia de la iniciativa. Así, el proyecto propone determinar que no se violó el proceso legislativo porque consta en el expediente que se notificó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado que se iba a discutir este asunto; este tribunal envió comunicado oficial en el cual solicitó la prórroga del asunto; el Congreso, sin estar obligado para ello, aceptó la exhortación y difirió el asunto; posteriormente, asistieron representantes de ese tribunal a las reuniones de trabajo con





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

diputados; finalmente, se aprobó esta iniciativa por unanimidad de votos, lo que supera la mayoría calificada exigida para superar las observaciones que, en su caso, hubiera hecho el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Con base en estos argumentos, se propone declarar infundados los conceptos de invalidez sobre el procedimiento legislativo, y reconocer su validez.

El señor Ministro Laynez Potisek se manifestó en contra del proyecto, dado que existe una violación que trasciende en la reforma en cuestión.

Indicó que, en primer lugar, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima estableció un procedimiento reglado a través del cual hace partícipes del proceso legislativo *ex ante* —de la votación de la reforma— al gobernador y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como lo prevén los artículos 44 y 45 de dicho ordenamiento.

En segundo lugar, indicó que la participación de los representantes consiste en: si objetan, tiene que haber un voto calificado de las dos terceras partes en el punto donde hubo discrepancia; el gobernador puede concurrir en forma personal o enviar un orador; ese tribunal será representado por su Presidente o por el Magistrado que se designe como orador; durante el debate participarán bajo las mismas reglas y condiciones establecidas para los diputados; el Oficial Mayor avisará oportunamente y de manera fehaciente a las autoridades señaladas la fecha de la sesión; en su





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

comparecencia en el debate en que se vota en sesión pública en el congreso, no pueden hacer proposiciones ni adicionar las presentadas, sino que sólo van a exponer las opiniones del Poder Judicial o se limitan a rendir los informes y a contestar las interpelaciones que se les dirijan en relación con el asunto; una vez realizado esto, se retiran del recinto legislativo y pueden permanecer en las galerías. Abundó que lo anterior se detalla en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

En este sentido, estimó que la Constitución de Colima introdujo un cambio en su proceso legislativo, para que participen los otros dos poderes de ese Estado con un procedimiento perfectamente reglado. Así, reconoció que si bien es cierto que, como narra el proyecto, se solicitó y se concedió una prórroga a ese tribunal y hubo una reunión conjunta de trabajo con los diputados, también es cierto que no hay constancia en los autos de que se haya citado fehacientemente a ese tribunal por medio del Oficial Mayor ni que haya participado en la sesión de la votación, incluso no se advierte su participación de la revisión del video de la sesión de la página de Internet del Congreso.

Por tanto, concluyó que no participó ese tribunal porque no lo citaron, por lo que, conforme a los precedentes de este Tribunal Pleno que se citan en el proyecto, se dio una violación al procedimiento que trasciende al resultado del proceso legislativo. Aclaró que no se trata de una violación de trámite o intraparlamentaria, ni de la obligación





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

convencional de las consultas, sino de una participación *ex ante* que dio el Constituyente de Colima a los otros dos poderes de su Estado, mediante un procedimiento perfectamente reglado, por lo que no estaría de acuerdo en la afirmación del proyecto de que la votación unánime valide la violación anotada, pues ello equivaldría al caso de un veto u observaciones del gobernador. Apuntó que no se pronunciaría acerca de la pertinencia o no de ese tipo de mecanismos de reformas, o si entorpecen o retrasan o no el procedimiento legislativo, en tanto que ello fue una decisión soberana del Constituyente de Colima.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea observó que lo dicho por el señor Ministro Laynez Potisek no está en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, sino que sus artículos 44, 45 y 46 contienen los derechos del gobernador y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de que se les notifique y que puedan nombrar un representante, a través del cual formulen objeciones. En el caso concreto, se les notificó, no nombraron representantes, solicitaron una prórroga y, finalmente, se aprobó el decreto por unanimidad de votos.

El señor Ministro Medina Mora I. valoró que existe una violación que trascendería, como lo señaló el señor Ministro Laynez Potisek; sin embargo, como ha votado en los precedentes, las violaciones al procedimiento legislativo son cuestiones de mera legalidad, desvinculadas a la competencia que otorga la Constitución Federal a las





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

entidades, poderes u órganos en su artículo 105, fracción I, y por ende, no es materia de una controversia constitucional.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció de acuerdo con el proyecto pues, a pesar de que no fue el procedimiento legislativo más correcto, no se trata de una violación que hubiera trascendido, en tanto que la garantía de audiencia del Poder Judicial del Estado se respetó en las comisiones, dado que emitieron su opinión. Consideró que no es aplicable por analogía el veto del Poder Ejecutivo, sino que se trata únicamente de una objeción vencida por más de las dos terceras partes de los votos en favor la iniciativa al momento de someterla al Pleno del Congreso, máxime si se votó por unanimidad.

El señor Ministro Cossío Díaz coincidió con el proyecto, especialmente con su análisis de las páginas treinta y treinta y uno: "Del acta de la sesión de ocho de diciembre de dos mil quince se desprende que los Magistrados enviaron un oficio y que con el fin de respetar el artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa solicitó retirar el dictamen de reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que se aprobó por mayoría de votos. Asimismo, consta en el expediente que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis se citó al Presidente del Supremo Tribunal a una reunión de trabajo con el fin de analizar las observaciones hechas al dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Y





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

efectivamente el cinco de febrero de dos mil dieciséis se tuvo una reunión de trabajo con Wendy Lisbeth García Nava, representante del Poder Judicial, y con Rosa Esther Pucheta Guzmán, Coordinadora General de Administración del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial, en la Sala de Juntas J. Francisco Múgica, en la que realizaron observaciones a la iniciativa de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Incluso, según consta en el Diario de Debates de la sesión del diez de febrero de dos mil dieciséis, los diputados les requirieron a los Magistrados que ellos participaran en las reuniones de trabajo y no solo enviaran a representantes. Así, con la presentación de las observaciones del Supremo Tribunal en la reunión de trabajo del cinco de febrero de dos mil dieciséis, se cumplió con el fin de los artículos 45 de la Constitución del Estado y 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que es que los legisladores pudieran conocer la opinión del Supremo Tribunal sobre la iniciativa de reforma al artículo 24, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Por lo anterior, estimó que se acataron los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esto es, se presentó la iniciativa, se dictaminó, se formularon observaciones, se convocó a los representantes del Poder Judicial, asistieron a las reuniones y se suscitó una discusión.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Apuntó que el elemento esencial consiste en interpretar el valor “podrá” del nombramiento del representante del Poder Judicial, en relación con la intervención que tiene en el procedimiento legislativo. Al respecto indicó que, si dicho Poder fue escuchado, pudo hacer observaciones, con esas observaciones se retiró el dictamen, se volvió a presentar el dictamen y tuvo la posibilidad de volver a participar, entonces quedó satisfecho el requisito constitucional. Apuntó que, probablemente, tendría que observarse otro estándar de validez si la norma indicara “deberá” en el nombramiento de ese representante, por ejemplo, que se tome en cuenta como un legislador más.

Sugirió eliminar, del párrafo segundo de la página treinta y dos del proyecto, las referencias a la aprobación por unanimidad de la iniciativa y al principio de economía procesal pues, por un lado, no agrega nada a la resolución y, por otro lado, abre una dimensión distinta sobre los efectos y el potencial invalidatorio de las violaciones al proceso legislativo. Adelantó que, de no aceptarse esta sugerencia, formularía voto concurrente para apartarse de esto.

La señora Ministra Luna Ramos concordó con el señor Ministro Laynez Potisek y, si bien las violaciones al proceso legislativo son en materia de legalidad, como indicó el señor Ministro Medina Mora I., es criterio de este Tribunal Pleno que, en ocasiones, trascienden al resultado del decreto correspondiente.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Señaló que, en el caso, el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima reza: “El Gobernador podrá nombrar un representante para que sin voto, asista a las sesiones con objeto (sic) de apoyar las observaciones que hiciere a las iniciativas de ley o Decreto y para sostener las que procedieren de él, a cuyo efecto se le dará oportuno aviso del día de la discusión”, y su diverso 45 enuncia que “El mismo derecho tendrá el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuando la iniciativa de ley o Decreto sea del ramo Judicial (sic), y para facilitarle su ejercicio, al darle aviso del día de la discusión se le remitirá copia de la iniciativa”. Estimó que la palabra “podrá” no exime al órgano legislativo a notificarle de las sesiones para que acuda, sin voto, a hacer las argumentaciones que considere convenientes respecto de la iniciativa.

En la especie, indicó que se le notificó con la iniciativa al inicio del procedimiento y compareció el representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a las comisiones, mas no a la reunión plenaria y, dado que no hay distinción en esos artículos sobre qué tipo de sesiones son para las que se les debe de notificar su presencia, entonces resulta correcto el reclamo de que no se les notificó a la sesión plenaria, máxime que no hay ningún documento que determine que efectivamente fueron citados, como indica la Constitución del Estado.

Recordó que este Tribunal Pleno ha determinado, en diversas acciones de inconstitucionalidad, la invalidez de los





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procesos legislativos cuando no se les convoca su asistencia a las personas con discapacidad o a los indígenas que tendrían que asistir a las discusiones de los procesos legislativos, por lo que debieron notificarle a estos representantes para la sesión plenaria.

Reconoció que la emisión del dictamen correspondiente y su aprobación es competencia y atribución del Congreso, pero se debe distinguir entre esta atribución y el incumplimiento de un procedimiento establecido en la Constitución local. Por esas razones, se pronunció por la invalidez y, por tanto, en contra del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán apuntó que, si bien la expresión “podrán” es potestativa, está condicionada a que se les notifique de la sesión y a que tengan a su alcance la iniciativa correspondiente.

En ese tenor, aun cuando en el caso se tiene constancia de que los representantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado acudieron a las sesiones de trabajo, no fueron citados al día en que se aprobó la reforma. En esas circunstancias y dado que el motivo por el cual la Constitución del Estado les otorga participación es respetar la oportunidad de que expresen sus observaciones frente a la Asamblea, ello pudo conllevar un resultado distinto del que se obtuvo, más allá de si fue aprobado por más de las dos terceras partes o por la totalidad del Congreso pues, probablemente, de haberlos escuchado, hubiera sido





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

determinante sobre la decisión del órgano legislativo, por lo que se trata de un procedimiento legislativo viciado.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que en la foja cuatrocientos veintinueve del expediente consta el oficio de tres de diciembre de dos mil quince que dice lo siguiente, dirigido al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual se le informó que estaba programada, para día martes ocho de diciembre del año dos mil quince, el dictamen relativo a las reformas de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se le anexó el dictamen que se pondría a consideración del Pleno de la Asamblea.

El señor Ministro Laynez Potisek observó que, para esa sesión de diciembre de dos mil quince, se solicitó prórroga y se concedió pero, para la diversa sesión de diez de febrero de dos mil dieciséis, en el que se aprobó el decreto impugnado, no existe prueba de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado haya sido citado.

La señora Ministra Piña Hernández recapituló que el criterio de esta Suprema Corte es que, para determinar la invalidez de la norma emitida, es necesario que las violaciones formales trasciendan de manera fundamental. En el caso, resaltó que la finalidad de los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima es conocer la opinión del





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Supremo Tribunal de Justicia del Estado sobre la iniciativa que se estaba presentando.

Valoró que, con esa finalidad y dado el hecho de que esos representantes no tienen voto, sino únicamente se limitan a que se les oiga, rindan informes y contesten interpelaciones, en su caso, y siendo que en este proceso legislativo emitieron una opinión en nombre del Poder Judicial del Estado y formaron parte de reuniones de trabajo, es decir, fueron escuchados, entonces, aun cuando existiera esa violación formal de que no se les citó a la sesión de aprobación del dictamen, ese vicio no trasciende a la validez de la norma y, por eso, coincidió con el proyecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo indicó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado es la parte actora en esta controversia constitucional, por lo que, sin desconocer la importancia de las formalidades de los procesos legislativos, por razones estrictamente de orden práctico, sería conveniente que este Tribunal Pleno se pronunciara acerca de los planteamientos de inconstitucionalidad que se hicieron valer, dado que, en todo caso, de determinarse que hubo una violación al proceso legislativo que trascendió al resultado normativo, traería como consecuencia volver a iniciar ese proceso, se citara de manera adecuada a ese tribunal para que mandara a su representante, expusiera su punto de vista y, finalmente, el órgano legislativo local emitiera la legislación o la modificación respectiva para, finalmente, volver a impugnar





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la inconstitucionalidad del resultado, máxime que quizás la demanda de esta controversia contiene la argumentación que se hizo valer en las reuniones de trabajo.

Aclaró que su posición se constriñe a este caso concreto, por razones de estricto orden práctico, por lo que no implica un pronunciamiento general de su parte en los temas de violaciones al proceso legislativo. Por esos motivos, se manifestó a favor del proyecto.

La señora Ministra Piña Hernández señaló que en el expediente consta que se citó al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para una reunión el cuatro de febrero de dos mil dieciséis para analizar las observaciones, que asistieron dos de sus representantes e, incluso, se les exhortó a que enviara magistrados y no representantes. Por tanto, reiteró que el Poder Judicial del Estado, a través de sus representantes, fue escuchado.

Subrayó que, si bien tuvieron lugar las observaciones, el Poder Legislativo del Estado no está obligado a tomar en cuenta todo lo observado, por lo que se cumple la formalidad con haberlos escuchado.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales consideró que, en el caso, se satisfizo la oportunidad de que el Poder Judicial del Estado participara, inclusive, se le dio conocimiento del dictamen. En ese tenor, puntualizó que este tipo de formalidades, como la de audiencia al Poder Judicial del Estado o, en su caso, al gobernador, prevén





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

aportaciones al contenido de la norma por lo que ve a sus competencias, pero su inobservancia no necesariamente invalida el proceso legislativo, porque no forman parte esencial del proceso de la deliberación ni de la formación de una ley y, por lo mismo, no se les otorga voto, máxime que el decreto correspondiente fue aprobado por unanimidad de votos de quienes tenían la facultad para ello. En ese sentido, se posicionó sustancialmente de acuerdo con el proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos recalcó que los artículos constitucionales abarcan todas las sesiones, no sólo una, siendo que hay constancia en el expediente de que hubo citación para una sola. Aseveró que, si bien estos representantes carecen de voto, al final de cuentas, ni pueden intervenir en la deliberación, entonces no debieron establecer un procedimiento en el que se les debe citar. Por esa razón, estimó que se violentó el proceso legislativo de tal manera que conllevaría la invalidez de la norma emitida.

En cuanto a lo dicho por el señor Ministro Pardo Rebolledo, explicó que la reposición de un procedimiento legislativo y la declaración de la invalidez de la norma resultante, no obliga a un nuevo procedimiento legislativo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales indicó que, si ya se había llamado al Poder Judicial del Estado y nombró un representante, en posteriores reuniones no deben notificarle para que vuelva a nombrar, sino que dicho representante deberá asistir a todas las sesiones.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán reconoció la aclaración del señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea de que el dictamen fue del conocimiento del Poder Judicial del Estado, pues no lo tenía registrado; sin embargo, el proyecto afirma que no existe prueba de que haya sido citado a la sesión del Congreso.

En ese tenor, indicó que el artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima prevé que los representantes no sólo podrán formular observaciones, sino apoyarlas durante la sesión, rendir los informes y contestar las interpelaciones de los diputados. Por tanto, esa prueba de que se le citó a la sesión del congreso le convenció.

El señor Ministro Laynez Potisek hizo hincapié en que se debe distinguir entre los procedimientos reglados y los que no. En el caso, dado que se trata de un proceso detalladamente reglamentado, no es factible analizar si se cumplió o no el objetivo de esas reglas, sino si se tomaron en cuenta o no, siendo que se dio una violación al procedimiento y, por tanto, trasciende, máxime que no es interparlamentario, sino que involucra a los otros dos poderes, a los que el Constituyente local hizo partícipes *ex ante* del procedimiento legislativo. Por eso, sostuvo su voto y formulará voto particular.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales advirtió que, si bien este proceso legislativo está muy regulado, es defectuoso, pues no se prevé una consecuencia de su





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

inobservancia en la norma, por lo que es factible que esta Suprema Corte determine el resultado de esa violación.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que tampoco se establece la consecuencia de la falta de consulta a las personas con discapacidad o los indígenas en las normas respectivas, sino que la estableció esta Suprema Corte.

La señora Ministra Piña Hernández recordó que, en los precedentes de las consultas a las personas con discapacidad, también votó en atención a que se cumplió la finalidad de los convenios, por lo que votará en consecuencia en este caso.

La señora Ministra Luna Ramos retomó que, en el asunto reciente de la Constitución Política de la Ciudad de México, se determinó que se cumplió la finalidad porque se tomaron en cuenta las propuestas de estas personas y las asociaciones que las representan pero, en el caso, eso no sucedió.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo el proyecto. Exhortó a no comparar las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad, con un requisito de una legislación local para dar audiencia a los otros dos poderes del Estado, en tanto que se trata de una cuestión jerárquica, es decir, los convenios que prevén esas consultas forman parte del bloque de constitucionalidad.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Modificó el proyecto con la sugerencia del señor Ministro Cossío Díaz, y para agregar los argumentos de los señores Ministros Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales, atinentes a que se cumplió la finalidad de la norma.

Indicó que el mecanismo que se estudia no implica la inclusión de los representantes de los Poderes Ejecutivo ni Judicial al Legislativo, como sugirió el señor Ministro Cossío Díaz, pues resultaría inconstitucional que se integren a la función legislativa funcionarios no electos democráticamente.

No coincidió con el señor Ministro Laynez Potisek en que sea un procedimiento totalmente reglado, sino que se trata de uno bastante abierto, esto es, solo se prevé el nombramiento de un representante y su notificación, por lo que, al haber sucedido eso en el caso, se cumplió el objetivo de la norma.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado “Vicios del procedimiento legislativo”, consistente en reconocer la validez del proceso legislativo del Decreto número 57 por el cual se reforman, derogan y adicionan diversos artículos la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de marzo de dos mil dieciséis, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Luna Ramos, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Franco González Salas anunció voto concurrente. El señor Ministro Cossío Díaz reservó su derecho de formular voto concurrente. El señor Ministro Medina Mora I. anunció voto particular. El señor Ministro Laynez Potisek anunció voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Luna Ramos para conformar uno de minoría, con la anuencia de éste.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales resaltó la importancia y utilidad del intercambio de ideas de este Tribunal Constitucional, de manera abierta y transparente a la opinión pública.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema 2, denominado “Violaciones de fondo”. El proyecto propone reconocer la validez del artículo 24, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima y la del artículo transitorio segundo del Decreto número 57 impugnado; en razón de que: 1) ni la Constitución del Estado ni la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyen a un órgano, ajeno al Poder Judicial, la implementación de las obligaciones previstas en el artículo 24, párrafo tercero, impugnado —que las sesiones serán públicas, se videograbarán y se transmitirán en vivo—, 2) aunque las normas impugnadas no prevean el presupuesto para cumplir con las obligaciones que imponen, los artículos





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

46 y 53 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima prevén que pueden aprobarse erogaciones adicionales y modificaciones presupuestales para hacerles frente, y 3) la obligación de hacer públicas, videograbar y transmitir en vivo las sesiones del Pleno del Tribunal y del Pleno de las Salas es compatible con la obligación de deliberar de manera autónoma e independiente, protegiendo la información reservada y confidencial.

Modificó el proyecto para agregar que ésta es una posibilidad que pueden establecer los Estados en sus Constituciones, no una obligación para todos los tribunales de los Estados.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en favor del proyecto y anunció que votará obligada por el criterio mayoritario.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema 2, denominado “Violaciones de fondo”, consistente en reconocer la validez del artículo 24, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima y la del artículo transitorio segundo del Decreto número 57 impugnado, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos obligada por la mayoría, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mora I., Laynez Potisek obligado por la mayoría, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se reconoce la validez del proceso legislativo del Decreto número 57 por el cual se reforman, derogan y adicionan diversos artículos la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de marzo de dos mil dieciséis. TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 24, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima y la de su artículo transitorio segundo del Decreto número 57 impugnado. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mená, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.





Sesión Pública Núm. 80

Jueves 31 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con veintisiete minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes cuatro de septiembre del año en curso, a las diez horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN